

EL DESAFÍO SOBERANISTA

La Guardia Civil refuerza sus equipos de investigación e información en Cataluña

REBECA CARRANCO, Barcelona

La Guardia Civil se refuerza en Cataluña y lo hace en pleno proceso independentista. El 8 de marzo se convocó una comisión de servicio para las unidades de Policía Judicial e Información del instituto armado en lo que se conoce como la séptima zona.

En total, unos 70 agentes se incorporarán a la plantilla en Cataluña, según fuentes del cuerpo consultadas por EL PAÍS. "El objetivo es potenciar las competencias en investigación de la Guardia Civil en Cataluña", aseguran esas mismas fuentes, que lo desvinculan de la batalla independentista.

Es la primera vez que se hace una comisión de este estilo para toda una comunidad autónoma, según fuentes policiales.

Los guardias que se trasladen a Cataluña estarán en su nuevo destino durante un año como máximo, aunque se tiene la voluntad de lograr que esas plazas sean fijas. La mayor parte de esos puestos, unos 50 en total, serán para las unidades de Policía Judicial de toda Cataluña. El resto se destinará a Información. Se trata de un traslado temporal, que permite el reglamento de la Guardia Civil, y en este caso está remunerado en los conceptos de alojamiento y manutención. Fuentes del cuerpo matizan que se trata de cubrir vacantes históricas en el territorio.

La convocatoria ha tenido éxito. Hasta ahora unos 700 guardias se han presentado como can-

didatos. El proceso está ya en su fase final y está previsto que el 1 de abril se puedan incorporar a sus puestos de trabajo. En general, una comisión de servicio dura como máximo un año y tiene el objetivo de "reforzar a unidades, centros u organismos" para "el desarrollo de determinados cometidos específicos o cuando el mayor volumen de servicio de los mismos no pueda ser atendido de manera eficaz por su plantilla orgánica", según recoge el reglamento del cuerpo. Es habitual, por ejemplo, que se hagan en la operación en el Estrecho durante el verano.

La Guardia Civil, que tiene más de 3.400 efectivos en Cataluña, es el cuerpo que en los últimos tiempos ha llevado las mayores investigaciones sobre corrupción en la región. Desde 2015 investiga el caso del 3%, la trama de presun-

ta financiación irregular de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Data de 2014 y se originó en la denuncia de un exconcejal de Torredembarra (Tarragona). La evolución del caso apunta a Germà Gordó, exconsejero de Convergència, e incluso al expresidente Artur Mas, implicado por un testigo protegido.

También investigan un supuesto caso de corrupción que salpica a 23 Ayuntamientos, vinculada a la constructora Efiel, para conseguir contratos fraudulentos. En esa investigación, el instituto armado pidió documentación sobre adjudicaciones en Girona cuando su alcalde era el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. O el caso del empresario Gustavo Buesa, exsocio de Jordi Pujol hijo, al que acusan de haber amañado un contrato para la con-

cesión de basuras en el municipio de Lloret de Mar, controlado por CDC. También es suyo el caso de los sobrecostes en la línea del AVI por presuntos sobornos a altos cargos de ADIF. Empezó en Barcelona y se ha extendido por toda la península, con obras investigadas en Castilla-León, Galicia, Euskadi y Asturias. O el de Innova, de presunta corrupción sanitaria, en el que hay más de 100 imputados con epicentro en Reus y el PSC y CDC en el punto de mira.

También a los socialistas le afecta el caso *Inipro*, sobre el presunto uso fraudulento por parte del Ayuntamiento de Tarragona en manos del socialista Josep Fèlix Ballesteros, de unos fondos municipales para pagar campañas para el partido. El caso *Pretoria*, de supuesta corrupción urbanística, que sienta estos días en el banquillo de la Audiencia Nacional a antiguos altos cargos de CiU y PSC, también fue competencia de la Guardia Civil.

Además, se acerca un ciclo complicado en Cataluña, con multitud de procesos abiertos por la cuestión soberanista, en los que quizá podría participar la Policía Judicial. En el procedimiento por la consulta del 9-N fue la Guardia Civil quien analizó la web que creó expresidente la Generalitat. Ahora el Gobierno de Puigdemont ha presentado un concurso de sobres y papeletas, que oficialmente es para unas futuras elecciones, aunque algunas fuentes apuntan que podrían ser preparativos para el referéndum.